



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL

Palmira, diez (10) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Se procede a decidir la acción de tutela propuesta por la señora ALBA MARY CAMPO MORALES, en contra de CONSORCIO PTAR PW

I. LA SOLICITUD.

La parte accionante acude a la acción de amparo en procura de la protección a los derechos fundamentales de petición, mínimo vital y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por el CONSORCIO PTAR PW solicitando respuesta para la solicitud radicada el 30 de septiembre de 2020.

La acción de tutela tiene como fundamento los hechos siguientes:

1.- Aduce la accionante que el 30 de septiembre presentó derecho de petición al CONSORCIO PTAR PW solicitando a la empresa que se hiciera la respectiva afiliación a salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales, pago de incapacidades médicas, pago de salarios dejados de percibir con ocasión del inicio de la pandemia ya que se encontraba vinculada a la empresa mediante contrato de obra pública
175

2.- Sostiene que el 13 de julio sufrió accidente laboral que le ocasionó varias lesiones como lumbalgia, alteración del sistema musculo esquelético, deficiencia en el desempeño muscular, lesión en menisco de rodilla derecha con antecedentes de meniscoplastia, dolor en columna lumbosacra intensa.

3.- Refiere que por razones de pandemia sus labores en la empresa fueron suspendidas, así como el pago de su salud, seguridad social, riesgos laborales y demás.

4º Reprocha la ausencia de atención por parte de Emssanar que sustenta mora en el pago de aportes, agregando que su salario se encuentra suspendido y sus incapacidades no han sido canceladas.

5°.- Sostiene que no ha recibido respuesta a la petición de 30 de septiembre de 2020 en procura del restablecimiento de sus derechos laborales.

I. TRAMITE ADOPTADO.

Al establecerse el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la acción de tutela, mediante proveído del 27 de octubre de 2020, se admitió la demanda y se ordenó imprimirle el trámite previsto por el decreto 2591 de 1991. En la misma providencia se dispuso solicitar los informes necesarios a la accionada y a los entes vinculados. Se decretaron las pruebas que se consideraron pertinentes. Así mismo, se solicitó al accionante informar sobre su capacidad económica.

La parte accionada y la EPS EMSSANAR, guardo silencio pese a que fue notificada vía correo electrónico.

LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRESS), luego de traer a colación diferentes normas y pronunciamientos de la Corte alusivos a su naturaleza jurídica y los derechos cuyo amparo se persigue, refieren que para el caso concreto, la carga constitucional y legal de dar respuesta, no se encuentra en cabeza del ADRES, configurándose una falta de legitimación en la causa por pasiva,. Solicita negar el amparo ya que la entidad no ha desplegado ningún tipo de conducta vulneratoria.

LA ARL SURA a través de la Dra. Lina María Angulo Gallego, en calidad de representante legal, replica la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Refiere que la accionante reporta un accidente de trabajo el 13 de julio de 2019 con diagnóstico único de “*trauma de rodilla derecha*” por lo que requirió tratamiento quirúrgico para reparación de ligamentos colateral medial, posteriormente le identificaron cambios degenerativos crónicos no derivados de accidente de trabajo pero sin lesión traumática aguda.

Sostiene que actualmente no tiene prestaciones pendientes y su última atención fue el 21 de abril de 2020 con tratamiento terminado y rehabilitación.

Agrega que fue calificada el 25 de marzo de 2020 con 0% de pérdida de capacidad laboral y pese a interponer recurso fue extemporáneo.

Aduce que si la peticionaria presenta alguna patología, es considerada de origen común, debiendo la EPS y AFP brindar todas las prestaciones que requiere hasta tanto no exista una calificación que señale lo contrario.

COLPENSIONES a través de la Dra. Malki Katrina Ferro Ahcar, en calidad de Directora de acciones constitucionales, aduce falta de competencia en lo pretendido al solicitarse respuesta a un derecho de petición por parte del consorcio.

Aclara que el trámite que se derive de enfermedad laboral o accidente de trabajo es competencia de la Administradora de riesgos laborales, enfatizando que la entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental y le corresponde a la ARL reconocer las incapacidades y emitir el correspondiente dictamen de pérdida de capacidad laboral.

LA ALCALDIA DE PALMIRA por medio de Ferney Camacho, Secretario de Infraestructura y renovación urbana y vivienda del municipio de Palmira, solicita que se declare improcedente la acción de tutela, al determinar la ausencia de relación de la administración municipal con la accionante.

Destaca que el contrato suscrito entre el Consorcio Ptar PW y el Municipio de Palmira no deriva en responsabilidad por las relaciones laborales de dicha accionada.

Mediante llamada telefónica, el señor esposo de Alba Mary Campo, informa que su núcleo familiar esta compuesto por la pareja y dos nietos; que viven en casa propia y El es el encargado de sufragar todos los gastos familiares. Asegura que la accionante presenta dificultades en la movilidad con una cirugía pendiente y con no pago de incapacidades desde el mes de mayo de este año. En comunicación posterior, pese a solicitar el Despacho una comunicación directa con la señora Campo que no fue obtenida, se le notifica a su señor esposo de la necesidad de aportar varios documentos como historia clínica reciente, incapacidades laborales y contrato de trabajo, momento en el que manifiesta que su esposa trabajó hasta el 13 de julio de 2019, data en la que permaneció incapacitada sin que cuente con incapacidades por la suspensión del servicio médico.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Carta Política, esta Instancia Constitucional es competente para pronunciarse a fondo respecto a la acción de

tutela interpuesta a favor de la señora Alba Mary Campo, en contra del Consorcio PTAR PW, tal como se dispone en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presupuestos de la acción

Se encuentran reunidos los requisitos señalados para emitir sentencia. La demanda fue presentada en debida forma; la capacidad para ser partes y la legitimación en la causa se encuentra acreditada toda vez que la accionante está legitimada para impetrar la acción como presunta afectada en sus derechos fundamentales y la accionada como extremo pasivo de esta acción, al vulnerar presuntamente con su actuación, los derechos reclamados en el escenario tutelar.

Se satisface el principio de subsidiariedad al ser la tutela el medio más idóneo para conjurar una presunta afectación a un derecho fundamental como es el de petición.

El de inmediatez se advierte cumplido al verificar que la tutela fue interpuesta en un término razonable de cara a la presentación del derecho de petición radicado el 30 de septiembre de 2020.

.

3. Problema jurídico:

El problema jurídico que debe dirimir esta Judicatura es el siguiente:

¿ (i) ¿Se ha vulnerado el derecho fundamental de Petición de la señora Alba Mary Campo Morales por parte del consorcio PTAR PW al no resolver de fondo la petición elevada el 30 de septiembre de 2020?

(ii) ¿Conforme a los hechos narrados en la tutela se puede inferir la vulneración de un derecho fundamental que a pesar de no ser solicitado en el escrito de tutela le permitan a esta Instancia Judicial proferir un fallo extra y/o ultra petita que permita su protección?

4. Tesis del Despacho.

La tesis que sostendrá este Despacho es que efectivamente se ha vulnerado el derecho fundamental de petición a la peticionaria dada la ausencia de una respuesta de fondo frente a los requerimientos que fuera elevado ante la accionada. El segundo problema jurídico debe ser absuelto en forma desfavorable al no contar con mayores elementos de juicio que lleguen a establecer que se han amenazado derechos como el mínimo vital, la seguridad social y una protección laboral reforzada.

5. Marco normativo y jurisprudencial

5.1 Derecho Fundamental de Petición

El derecho de petición es una garantía que ha sido reconocida dentro de la propia Constitución Política en su artículo 23, al preceptuar que toda persona puede formular peticiones ante las autoridades, dirigidas a obtener una pronta resolución de la cuestión sometida a su conocimiento, por lo que dada esa connotación de fundamentalidad de la que se reviste, la Corte Constitucional ha abordado su análisis en diversos pronunciamientos jurisprudenciales a partir de los cuales, ha delimitado una serie de características que deben ser observadas en aras a no conculcar la mentada garantía constitucional.

Así las cosas, el Alto Tribunal Constitucional ha delimitado como características las siguientes: ¹

“(...) (i) Es un derecho fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa y a través de él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de lo solicitado.

(iii) Los requisitos que debe cumplir la respuesta son los siguientes: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario.

(iv) La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

(v) Es un derecho dirigido en principio, a las entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Sin embargo, la Constitución también señaló que es extensivo a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

(vi) Cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Si el particular presta un servicio público o realiza funciones de autoridad, el derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Si el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el legislador lo reglamente.

(vii) De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda petición debe resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

¹ Sentencia T-377 de 2000. Reiterado en la sentencia T-086 de 2015.

(viii) *La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.*

(ix) *El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser esta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. (...)”* (Negrillas fuera del texto)

En definitiva, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el sentido y alcance del derecho de petición sostenido que es un derecho fundamental y que mediante él se garantizan otros mecanismos constitucionales como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. Así mismo, ha sostenido que el núcleo esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de lo petitionado y, en esa medida, la respuesta debe ser oportuna, de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado. (...)”²

Cabe precisar que este derecho fundamental fue reglamentado con la expedición de la Ley 1755 de 2015 “*por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*” como marco legal que fija los parámetros para su observancia en cuanto a forma, concretamente en su artículo 14.

Asimismo, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en todo el territorio nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el gobierno colombiano se han adoptado medidas dirigidas a mitigar su impacto lo que para el caso de estos trámites, se traduce en la expedición del decreto legislativo 491 del 29 de marzo de 2020 en el que se amplían los términos señalados en el artículo 14 de la ley 1437 de 2011 modificado por el art. 14 de la Ley 1755 de 2015, así:

“Artículo 5°. Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

- (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.*
- (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.”*

6.- El caso concreto

² Sentencia T-086 de 2015

La señora Alba Mary Campo Morales, presentó acción de tutela por la omisión del CONSORCIO PTAR PW en dar respuesta de fondo al derecho de petición presentado el 30 de septiembre de 2020, relacionado con el restablecimiento de sus derechos laborales por su vinculación dentro de la empresa mediante contrato de obra No. 175.

Las evidencias probatorias allegadas al expediente, dan cuenta de una evidente afectación del derecho de petición de la actora en la medida en que superado el término legal dispuesto, no ha recibido una respuesta a sus peticiones deprecadas en la solicitud de 30 de septiembre dirigidas al restablecimiento de sus derechos laborales, pago de salarios, afiliación en salud, pensión y riesgos laborales al igual que la suspensión del contrato de trabajo del que fuera objeto en virtud de la emergencia sanitaria por Covid-19. En su escrito reprocha el no pago de incapacidades desde el 13 de julio de 2019 que hasta la fecha no han sido candeladas.

El Consorcio Ptar PW durante el término de respuesta guardó silencio, lo que significa que acepta los hechos referidos en el escrito tutelar sin perjuicio de que los elementos probatorios arrojen una conclusión diferente.

Esta situación en principio, llevaría a ordenar que la accionada ofrezca una respuesta de fondo y concreta a los pedimentos de la señora Alba Mary Campo Morales, sin embargo, a juicio de esta Judicatura no se puede pasar por alto que la solicitud se dirige a la protección laboral reforzada, como suceso que en ejercicio de las facultades extra petita que se han otorgado a los jueces constitucionales³, lleva a determinar la viabilidad de su concesión en sede de tutela.

En efecto, la solicitud de tutela da cuenta de situaciones que para la actora trasgreden derechos como la salud, seguridad social y mínimo vital relacionados directamente con la suspensión de su contrato de trabajo que le generó una cesación de los servicios de salud necesarios para dirigir el tratamiento a las enfermedades que actualmente le aquejan, sin embargo, pese al ejercicio probatorio que en forma oficiosa fue desplegado por el Despacho, no se cuenta con elementos de juicio suficientes y conclusivos que revistan de certeza una afectación a sus garantías constitucionales que requieran la adopción de acciones afirmativas de protección en el escenario de tutela. Nótese que en la constancia surtida por la escribiente del Despacho se da cuenta de la solicitud que fuera

³ En sentencia T-634 de 2017 se dijo: “El juez de tutela está facultado para emitir fallos extra y ultra petita, cuando de la situación fáctica de la demanda puede evidenciar la vulneración de un derecho fundamental, aun cuando su protección no haya sido solicitada por el peticionario”.

realizada por orden verbal de la suscrita respecto a la entrega de documentos como historia clínica reciente o al menos servicios posteriores a julio de 2019; contrato laboral; incapacidades que permitieran establecer si efectivamente se trata de una persona que gozaba de una protección reforzada, como pruebas que no fueron allegadas al expediente pese a la insistencia telefónica resaltando que no fue posible entablar comunicación con la accionante que permitiera ahondar en más detalles siendo siempre su esposo el que atendía las llamadas. De ello se sigue la imposibilidad de surtir un estudio constitucional extra petita que determine una presunta vulneración en ese sentido y si bien la accionada no dio contestación a la acción instada, se itera que no se contó con probanzas que enfilen al reconocimiento de derechos *ius fundamentales* adicionales al denunciado.

En esa línea de acontecimientos, esta Judicatura encuentra vulnerado el derecho fundamental de petición como suceso que tampoco fue controvertido por la accionada, toda vez que guardó silencio en esta acción constitucional, por tanto se tutelaré el derecho de petición de la actora, ordenando a la demandada una respuesta clara, congruente y de fondo a lo pedido frente a la reclamación que elevara el 30 de septiembre de 2020.

IV.- DECISIÓN.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: TUTELAR al derecho fundamental de petición de la señora Alba Mary Campo Morales, identificada con cédula de ciudadanía número 38.705.109, de acuerdo a la parte considerativa de la presente providencia.

Segundo: ORDENAR al CONSORCIO PTAR PW, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que en el término no superior a cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, **si aún no la ha hecho**, proceda a dar respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud radicada el 30 de septiembre de este año, sea favorable o no a lo pedido y notificando en debida forma la decisión.

Tercero: ADVERTIR a la entidad demandada que la inobservancia de las órdenes impartidas en el presente fallo de tutela, conlleva a la iniciación de los trámites dispuestos en el artículo 27 y 52 del decreto 2591 de 1991.

Acción de Tutela: 76-520-40-03-006-2020-00208-00

Accionante: Alba Mary Campo Morales

Accionado: Consorcio PTAR PW

Sentencia: 84

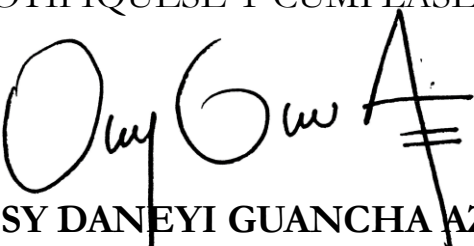
Cuarto: NOTIFICAR la decisión a las partes por el medio más expedito conforme lo previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991

Quinto: La presente decisión puede ser objeto de impugnación ante el superior jerárquico, dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Sexto: Si esta providencia no fuere impugnada en los términos consagrados por la ley, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Séptimo: ARCHIVAR el expediente previa desanotación de rigor en el libro radicator, una vez se surta el trámite de revisión ante la Corte Constitucional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


DEISSY DAN EYI GUANCH A ZA
JUEZA